

C.A. de Concepción

xsr

Concepción, veinte de julio de dos mil veintiuno.

Visto:

Por sentencia de ocho de febrero del año en curso, dictada en la causa RIT S-1-2020, por el Juzgado de Letras de Arauco, se acogió la demanda interpuesta por doña Belén Nieves Ortiz Reyes en contra de Forestal Arauco S.A., sólo en cuanto declaró ilegal la separación de la actora de que fue objeto el 5 de junio de 2020, debiendo la demandada reincorporarla definitivamente a sus funciones habituales y pagarle todas las remuneraciones y demás prestaciones derivadas del contrato de trabajo entre el 5 de junio de 2020 hasta la fecha en que se materialice la reincorporación; la que deberá efectuarse dentro del décimo día desde que la sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de multa. La parte condenada deberá acreditar, dentro de los cinco días siguientes a su reincorporación el pago de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas, en razón de \$709.168. Rechazó en lo demás la demanda de prácticas antisindicales y subsidiarias de prácticas antisindicales consistentes en actos de injerencia sindical. Asimismo rechazó las excepciones de falta de legitimidad pasiva de la demandada Forestal Arauco S.A. Todo ello sin costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

En su contra la demandada dedujo recurso de nulidad, invocando la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley con influencia en lo dispositivo del fallo y, en subsidio, aquella otra prevista en la letra e) del artículo 478 del mismo Código, por haberse extendido el fallo a puntos no sometidos a su decisión.

CONSIDERANDO:

1º Desarrollando la **causal principal** señaló como infringidas las siguientes normas:

a).- El artículo 238 inciso 1º del Código del Trabajo, que dispone “Los trabajadores de los sindicatos de empresa, de establecimiento de empresa, interempresa y de trabajadores transitorios o eventuales, que sean candidatos en la forma prescrita en el artículo anterior, gozarán del fuero previsto en el inciso primero del artículo 243, desde que el directorio en ejercicio comunique por escrito al empleador o empleadores y a la Inspección del Trabajo que corresponda, la fecha en que deba realizarse la elección respectiva y hasta esta última. Dicha comunicación deberá practicarse con una anticipación no superior a quince días de aquel en que se efectúe la elección. Si la elección se postergare, el fuero cesará en la fecha en la que debió celebrarse aquélla”.

b).- El artículo 243 inciso 1º del Código del Trabajo, que establece



“Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deban hacer abandono del mismo, por renuncia al sindicato o por término de la empresa”.

c).- El artículo único de la Ley 21.235, de fecha 29 de mayo de 2020, que señala “Los procesos electorales de directivas sindicales, de delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de directivas de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la ley No 19.296, que se hubieren iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo N°104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o aquellos que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, y que en ambos casos no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de esta ley, se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que se encuentren.

“En caso de que el estado de excepción constitucional de catástrofe se prorrogue parcialmente en una o más regiones del país, la suspensión afectará solamente a dichas regiones. Tratándose de organizaciones sindicales o de asociaciones de funcionarios que afilien a trabajadores que presten funciones en distintas regiones, se mantendrá suspendido el proceso electoral hasta que se levante el estado de excepción constitucional en la última región en la que éste deba realizarse.

“Con todo, si la organización sindical respectiva o aquellas asociaciones de funcionarios regidas por la ley N° 19.296 estimaren que existen las condiciones para realizar el proceso electoral, éste podrá ser llevado a efecto de conformidad a sus normas estatutarias y disposiciones legales vigentes.

“En los casos señalados en el inciso primero, la vigencia del mandato sindical de directores y delegados sindicales, así como de directores de las asociaciones de funcionarios regidas por la ley No 19.296, se entenderá prorrogada por el número de días que restaba para el término del plazo del mandato original al momento de decretarse el estado de excepción constitucional antes mencionado, contados desde el cese de dicho estado de excepción constitucional, o de su prórroga, el que nunca podrá ser inferior a quince días hábiles”.

d).- Los artículos 19 inciso 1° y 20 del Código Civil.

e).- El artículo 174 del Código del Trabajo, que establece “En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá



poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.

“El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a remuneración. Si el tribunal no diere autorización para poner término al contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios, debidamente reajustados y con el interés señalado en el artículo precedente, correspondientes al período de suspensión, si la separación se hubiese decretado sin derecho a remuneración. El período de separación se entenderá efectivamente trabajado para todos los efectos legales y contractuales”.

Señala el recurrente que su parte alegó la inexistencia de práctica antisindical y del fuero de la trabajadora denunciante, pues la Directiva del Sindicato Empresa Sotro sur Ltda. N° 3, comunicó a su representada que la elección para renovar la directiva se llevaría a efecto el día 20 de marzo de 2020. Llegado el día fijado para la elección ésta no se llevó a efecto, cesando en consecuencia el fuero de los trabajadores candidatos, incluida la demandante, conforme al artículo 238 inciso 1° del Código del Trabajo. La Ley N° 21.235 (29 de mayo de 2020), en su artículo único dispuso la prórroga de la vigencia del mandato sindical de los directores y delegados sindicales por el número de días que restaba para el término del plazo del mandato original al momento de decretarse el estado de excepción constitucional de catástrofe, contados desde el cese de dicho estado de excepción constitucional, o de su prórroga, el que nunca podría ser inferior a quince días. Tal norma contempla la posibilidad de realizar el proceso electoral de renovación de directorio si la organización sindical estima que existen las condiciones para su realización. Respecto de los procesos electorales de directivas sindicales que se hubieren iniciado antes del 18 de marzo, y que no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de la ley, la norma señala que se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que encuentran.

En opinión del recurrente dicha ley ninguna innovación introdujo respecto del fuero establecido en el artículo 238 inciso 1° del Código Laboral y, en consecuencia, ningún fuero amparaba a la demandante al momento de su desvinculación, ocurrida el 5 de junio de 2020. Cita lo resuelto en el ámbito administrativo en ese sentido por la Inspección Comunal del Trabajo de Curanilahue.

Reprocha lo señalado por el tribunal en el considerando octavo de



la sentencia recurrida, en el sentido que, en el caso en comento, no estaríamos en presencia de un caso de postergación de la elección contemplado en el art. 238 inc. 1° del Código del Trabajo, sino de suspensión de la misma, atribuyéndole a ambas expresiones -postergar y suspender- connotaciones distintas, alterando de esta manera el sentido natural y obvio de las palabras referidas, e introduciendo además una distinción que el legislador no ha efectuado. Transcribió el motivo octavo aludido, siendo especialmente relevante la parte en que expresa: “Además, la elección de la demandante no se ha llevado a cabo, no porque el Sindicato o la empresa o los propios candidatos hayan querido “prorrogar” esta elección, sino porque existió una causal ajena a su voluntad que luego generó un estado de excepción constitucional que se mantiene hasta hoy. Cabe preguntarse; si no hubiese existido el estado de excepción ni la pandemia que impide las reuniones masivas por disposición de autoridad sanitaria, se habría llevado a efecto la elección; y la respuesta más lógica es que sí; así como resulta lógico pensar que justamente no pudo hacerse por la situación excepcional que atraviesa el país. De manera tal, que se concluye que habiéndose suspendido el proceso de elección a directiva sindical de la denunciante, éste debió mantenerse en el estado en que se encontraba, por disposición de la ley 21.235 y que su separación es ilegal, por haber gozado de fuero en dicha fecha; por lo que procede la reincorporación de la misma y el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales como se señalará en lo resolutivo de esta sentencia”.

Reclama el recurrente esa inteligencia de las normas, de estimar que las expresiones “prorrogar” (postergar) que contienen el art. 238 del Código del Trabajo y “suspender” de la Ley 21.235 tendrían un significado diferente, citando para ello las definiciones que para una y otra contempla el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y luego, hace una distinción que el legislador no ha establecido, para concluir que la norma del art. 238 no sería aplicable en este caso, y en consecuencia, a su juicio, la trabajadora demandante gozaría de fuero a la fecha de su desvinculación.

Insistió que la sentenciadora ha incurrido en infracción de ley, pues ha interpretado las normas citadas de un modo incorrecto o con alcances equívocos; y ha hecho una falsa aplicación de las disposiciones, no aplicando el art. 238 inc. 1° del Código del Trabajo a un caso expresamente reglado por él. El art. 20 del Código Civil dispone que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. El sentido natural y obvio de las palabras es el que se encuentra en el uso corriente que se les da a las



mismas en la comunidad o medio en el que se las emplea. Así, el sentido natural y obvio de las expresiones “postergar” y “suspender” nos indica que ambas son palabras sinónimas, que se refieren a retrasar, retardar, prorrogar o dilatar algo en el tiempo, pudiendo usarse una u otra indistintamente, sin alterar el sentido de la frase en que ellas se utilicen. A la misma conclusión se arriba si se consulta la definición que de dichas palabras hace la Real Academia Española de la Lengua. El Diccionario de la RAE define “postergar” -expresión utilizada por el art. 238 del Código del Trabajo- como “hacer sufrir atraso, dejar atrasado algo, ya sea respecto del lugar que debe ocupar, ya del tiempo en que había de tener su efecto”. Y define “suspender” -utilizada por la ley 21. 235- como “detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”. El mismo diccionario define “atrasar” como retardar; y “diferir” como aplazar. A su vez, define “retardar” como diferir, detener, entorpecer, dilatar; y “aplazar” como retardar el momento de realizar algo. No cabe duda entonces, que las expresiones postergar y suspender no se refieren a situaciones diferentes, como erradamente se interpreta en la sentencia, sino que se trata de palabras sinónimas, calidad que comparten con los vocablos atrasar, diferir, retardar, aplazar, dilatar, entre otras. Ese es el sentido natural y obvio de las palabras contenidas en las normas citadas.

Luego argumenta que al ser sinónimas las expresiones utilizadas en el art. 238 del Código del Trabajo y en el art. único de la Ley 21.235, se concluye que la postergación de la elección que supone el cese del fuero en la fecha en que ésta debió celebrarse, es aplicable al caso de postergación de la elección a consecuencia del estado de excepción constitucional que rige desde el 18 de marzo de 2020, pues el art. 238 del Código del Trabajo no distingue si la postergación de la elección obedece a un acto voluntario, o a un hecho ajeno a la voluntad de los dirigentes sindicales. Esta distinción fue igualmente introducida por la sentenciadora en circunstancias que la norma no hace distinción alguna, ni ella puede concluirse de la definición de las palabras “postergar” y “suspender”, pues como se indicó, se trata de expresiones sinónimas. “Donde la ley no distingue no cabe al interprete distinguir”. La norma contenida en la Ley 21.235 no hace referencia alguna al fuero de que gozan los candidatos a directorio de una organización sindical, resultando plenamente aplicable la disposición contenida en el art. 238 del Código del Trabajo al caso de autos, de manera que el fuero de que gozaba la demandante en tanto candidata a directorio del sindicato, cuya elección debía realizarse el 20 de marzo de 2020 y que fue suspendida o postergada, cesó el 20 de marzo de 2020, por no haber podido realizarse la elección. Y en consecuencia, su desvinculación el día 5 de junio de 2020 no fue ilegal toda vez que la



trabajadora no se encontraba amparada por fuero alguno. Tampoco fue injustificada, pues fue consecuencia de un proceso de reestructuración del que la actora estaba en conocimiento; y a mayor abundamiento, como parte del mismo, el día en que se puso término al contrato de la trabajadora se puso término al contrato de otros dos trabajadores que se desempeñaban en las mismas funciones que ella, como viverista.

Concluyó que el sentido de la norma es claro, no establece el legislador en el art. 238 del Código del ramo distinción alguna, debiendo en consecuencia aplicarse debidamente al caso de autos.

Además, afirma que se infringió la norma contenida en el art. 174 del Código del Trabajo, que establece la exigencia del desafuero para que el empleador pueda desvincular a un trabajador que se encontraba amparado con él. Indica que la sentenciadora rechazó las demandas principal y subsidiaria por prácticas antisindicales, sin embargo acogió la demanda declarando ilegal el despido por considerar que la trabajadora gozaba de fuero a la época de la desvinculación, en circunstancias que, como se ha expuesto, a la fecha del despido, la trabajadora no se encontraba amparada por fuero alguno, vulnerando en consecuencia, el art. 174 del Código del Trabajo, aplicándolo a un caso en que no procedía su aplicación.

En subsidio de la causal anterior, invocó la causal contenida en el art. 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal o extrapetita.

Al respecto expresa que el tribunal, en el considerando octavo, párrafo final de la sentencia, señala: “De manera tal, que se concluye que habiéndose suspendido el proceso de elección a directiva sindical de la denunciante, éste debió mantenerse en el estado en que se encontraba, por disposición de la ley 21.235 y que su separación es ilegal, por haber gozado de fuero en dicha fecha; por lo que procede la reincorporación de la misma y el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales como se señalará en lo resolutivo de esta sentencia”. Luego, en el considerando noveno, indica, en relación a las demandas principal y subsidiaria por práctica antisindical: “Que, desvincular a una trabajadora que goza de fuero sin previo procedimiento de desafuero; si bien infringe lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, no constituye por sí solo una práctica antisindical; desde que el artículo 289 del Código del Trabajo se refiere a acciones que atenten contra la libertad sindical y a modo enunciativo señala algunas cuyas conductas entre otras son: presionar, amenazar, ejecutar maliciosamente, despedir manifestando su intención de sindicalizarse”, etc. Finalmente, en los puntos I y II de la



parte resolutive de la sentencia, establece: “Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 237, 238, 243, 289, artículo único de la Ley 21.235, artículos 453 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 495 del mismo cuerpo legal, se declara: “I. Que, se acoge la demanda interpuesta por el abogado don Raúl Romero Espinoza en representación de doña Belén Nieves Ortiz Reyes en contra de Forestal Arauco S.A., sólo en cuanto se declara ilegal la separación de la actora de que fue objeto el 5 de junio de 2020, debiendo esta sociedad reincorporarla definitivamente a sus funciones habituales y pagarle todas las remuneraciones y demás prestaciones derivadas del contrato de trabajo entre el 5 de junio de 2020 hasta la fecha en que se materialice la reincorporación; el cual deberá efectuarse dentro del décimo día desde que esta sentencia quede ejecutoriada, diligencia que deberá efectuarse con Receptor Judicial de este tribunal, previa coordinación con la parte interesada, bajo apercibimiento de multa de 50 Unidades tributarias mensuales. Debiendo acreditarse por la parte condenada, dentro de los cinco días siguientes a su reincorporación el pago de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas, en razón de \$709.168.- II. Que, se rechaza en lo demás la demanda de prácticas antisindicales y subsidiarias de prácticas antisindicales consistentes en actos de injerencia sindical”.

Sin embargo, en la demanda consta que las acciones ejercidas por la demandante y sometidas a conocimiento del tribunal fueron tres: En lo principal, denuncia por práctica antisindical por despido ilegal de trabajadora con fuero, citando al efecto las normas contenidas en los art. 161, 162, 163, 168, 172, 173, 420, 446, 485 y 489 y siguientes, todas del Código del Trabajo; en el primer otrosí, acción subsidiaria de práctica antisindical, consistente en actos de injerencia sindical con ocasión del despido, citando las mismas disposiciones indicadas y en los art. 289 y 290 del Código del Trabajo; y en el segundo otrosí, acción subsidiaria de despido injustificado, indebido e improcedente, por estimar que el despido es infundado y que la conducta de la empresa no se conduce con la causal invocada -art. 161 inc. 1º del Código del Trabajo- cuestionando y desconociendo la efectividad de la reestructuración del área de producción referida en la carta de despido. En el petitorio de la acción principal, en parte alguna la actora solicita la declaración de despido ilegal por desvinculación de trabajadora con fuero. Lo mismo ocurre en el petitorio de la acción subsidiaria de práctica antisindical deducida en el primer otrosí, y en el petitorio de la acción subsidiaria de despido injustificado, indebido e improcedente deducida en el segundo otrosí. Resulta evidente entonces que no fue ejercida por la demandante, y por tanto, no ha sido sometida a conocimiento del tribunal, la acción de despido injustificado



por supuesto despido ilegal de la actora por haber gozado de fuero. En consecuencia, la sentencia incurre en el vicio de nulidad invocado al extenderse a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, fallando por tanto, extrapetita, al declarar rechazadas las demandas principal y subsidiaria de prácticas antisindicales, pero “acoger la demanda (...) sólo en cuanto se declara ilegal la separación de la actora de que fue objeto el 5 de junio de 2020”, acción que no se ha deducido. Cabe recordar que aún la acción subsidiaria por despido injustificado, indebido e improcedente no se funda en haber sido desvinculada una trabajadora con fuero, sino en que supuestamente la reestructuración del área en que se desempeñaba no sería tal. De esta manera, el tribunal está extendiendo su decisión a puntos que no fueron sometidos a su conocimiento por las partes, pues no fue objeto de la demanda ni de la contestación.

2º La **causal principal** planteada por el recurrente procura proteger la observancia, significado y alcance de la ley, velando por la aplicación del derecho en su sentido verdadero y genuino. Se presenta así como heredera de la casación en el fondo tradicional, asociada a sus objetivos inherentes: cautela la vigencia del principio de legalidad, satisfaciendo tanto el interés público de anular sentencias que infrinjan la ley como el interés privado de tutela legal del recurrente (Astudillo Contreras, Omar “El Recurso de Nulidad Laboral”, AbeledoPerrot Legal Publishing Chile, octubre de 2012, p. 63).

En consecuencia, la norma infringida debe ser de carácter sustancial, o sea de aquellas que definen la Litis y deben ser respetados los hechos, tal como fueron establecidos en la sentencia impugnada.

3º En lo sustancial, el recurrente cuestiona la interpretación y consecuente aplicación que la jueza a quo realiza respecto del artículo 238 inciso 1º del Código del Trabajo y el artículo único de la Ley N° 21.235, distinguiendo, más allá de lo que permitirían las reglas tradicionales de interpretación en el ámbito privado, entre la expresión “*postergar*” que emplea la primera norma, asignándole una connotación voluntaria que depende del espectro de actuación del sindicato, con la locución “*suspender*” que utiliza el segundo precepto, haciendo prevalecer este último, atendida su aplicación legal obligatoria por encontrarse motivado por un evento totalmente desvinculado con la voluntad de la organización sindical de que se trata, generando así un efecto aplicativo más favorable a la trabajadora y su fuero, en calidad de candidata a la directiva del sindicato, cuyas elecciones no pudieron realizarse por razones externas y poderosas.

Tal entendimiento es compartido por esta Corte, pues en el segundo caso no se trata de una mera suspensión en el sentido natural y obvio que



es captado por el Diccionario de la Lengua, sino de una “*suspensión de pleno derecho*”, o sea de una decisión legislativa vinculante que obedece a razones específicas atendibles. Luego, entender que la suspensión de los procesos electorarios genera la mantención del fuero sindical propio de los trabajadores candidatos, se ajusta a los principios inspiradores del Derecho laboral, en especial la estabilidad en el empleo y el indubio pro operario.

En razón de lo anterior no se verifican las infracciones de ley denunciadas y corresponde desestimar la causal invocada por vía principal.

4º En cuanto a la causal de nulidad subsidiaria, de la lectura del libelo pretensor y de la parte decisoria de la sentencia impugnada no se constata una incongruencia de tal entidad que conduzca a la indefensión de la parte demandada, si bien no se otorgó exactamente lo solicitado por la demandante, lo resuelto se encuentra dentro de lo pedido. En efecto, la demandada estaba en pleno conocimiento que lo reclamado era la subsistencia del fuero sindical y que el efecto natural de ello era la declaración de ilegalidad de la separación de la trabajadora aforada, con la consiguiente obligación de reincorporación.

La causal de invalidación de extrapetita no resguarda una mera formalidad, que suponga la equivalencia exacta entre lo solicitado por la actora y lo concedido por el órgano jurisdiccional, sino que garantiza que el diseño procesal no deje en la indefensión a la parte demandada, lo que en la especie no aconteció.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 474, 477 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del Ministro don Rodrigo Cerda San Martín.

NºLaboral - Cobranza-160-2021.





FYGSKXHLSP

Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros titulares Hadolff Gabriel Ascencio Molina, Rodrigo Alberto Cerda San Martín y la fiscal judicial Silvia Claudia Mutizábal Mabán. Concepción, a veinte de julio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veinte de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

